



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-014-2021-00424-01
Demandante: Blanca Elva Arango
Demandado: Itaú Corpbanca Colombia S.A.
Asunto: Consulta de Sentencia
Procedencia: Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: Pensión de jubilación convencional

Medellín, diciembre trece (13) de dos mil veintitrés (2023)

En fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a impartir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandante, respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2023 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Blanca Elva Arango contra Itaú Corpbanca Colombia S.A. conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-014-2021-00424-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora Blanca Elva Arango instauró demanda ordinaria laboral contra Itaú Corpbanca Colombia S.A. pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987; se declare que la referida prestación es vitalicia, compatible y excluyente con la pensión legal que actualmente percibe; se indexe la base salarial para determinar la primera mesada pensional; y se reconozcan los intereses de mora, o en subsidio la indexación.

Subsidiariamente, pretende se declare la ineficacia o invalidez de la conciliación y/o transacción celebrada con el entonces Banco Comercial Antioqueño S.A., y se ordene el restablecimiento del reconocimiento de la pensión jubilación convencional con las características de vitalicia, compatible y excluyente; o que se ordene el reconocimiento de la pensión convencional referida, desde el momento en el que cumplió los cincuenta (50) años de edad, indexando hasta esa fecha la base salarial; adicionalmente, pretende el reconocimiento de los intereses de mora, o en subsidio la indexación.

En respaldo de tales pedimentos la señora Blanca Elva Arango expuso que nació el 22 de septiembre de 1948, por lo que cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes del año 1998; que laboró al servicio del Banco Comercial Antioqueño S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., desde el 11 de octubre de 1967, acreditando 20 años de servicio el mismo día y mes del año 1987; que laboró al servicio de la entidad hasta el 08 de junio de 1997, fecha para la que acreditaba 48 años de edad, y 29 años de servicio; que en el último año de servicios devengó un salario de \$476.105, el cual, indexado hasta el 22 de septiembre de 1998, arroja un valor promedio de \$560.280; y que mediante convenio celebrado el 12 de junio de 1997, el Banco Comercial Antioqueño S.A. le reconoció una pensión transitoria de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio del último año la cual sería pagada hasta que le fuera reconocida la pensión legal, continuando a su cargo solo el pago de la diferencia, si la hubiere.

Aseveró que es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, que la misma prevé el reconocimiento de una *pensión mensual vitalicia de jubilación*, sin límite en el

tiempo, la cual se causa con el tiempo de servicio, y se hace exigible con el cumplimiento de la edad; que dicha convención se encontraba vigente para fecha en que cumplió los 20 años de servicio y los 50 años de edad, por cuando no había sido modificada, derogada, transformada o denunciada; y que para el reconocimiento de la prestación a cargo del banco debieron tenerse en cuenta las condiciones descritas en la convención, específicamente en lo que respecta a la compatibilidad de la pensión de jubilación con la pensión legal, y el monto de la prestación, para lo cual debió indexarse el promedio del salario devengado en el último año de servicios, desde la fecha de terminación del contrato, y hasta la fecha en que cumplió la edad mínima.

Finalmente informó que, con el fin de interrumpir la prescripción, el 12 de marzo de 2020, le solicitó a Itaú Corpbanca Colombia S.A. el reconocimiento de las pretensiones incoadas en esta demanda (doc.05, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial legalmente constituido, el banco **Itaú Corpbanca Colombia S.A.** admitió que la señora Blanca Elva Arango laboró al servicio del Banco Comercial Antioqueño S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., entre el 11 de octubre de 1967 y el 08 de junio de 1997, y que la relación de trabajo terminó por mutuo acuerdo entre las partes, mediante contrato de transacción celebrado el 03 de junio de 1997, y acta de conciliación suscrita el 12 de junio de 1997 ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín.

Admitió que las Convenciones Colectivas de Trabajo 1985-1987 y 1991-1993, prevén el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional en favor de los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante 20 años a la compañía, hubieren arribado los 50 años de edad, en el caso de las mujeres, o 55 años de edad, en el caso de los hombres, y tuvieran contrato de trabajo vigente al momento de cumplir ambos requisitos; que en vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 la actora solo contaba con 37 años de edad; que en vigencia de la Convención Colectiva 1991-1993 la demandante solo alcanzó los 45 años de edad; que para la fecha de terminación

de la relación de trabajo solo tenía con 48 años de edad; y que en el contrato de transacción y la conciliación celebrada, por solicitud expresa de la actora, y mera liberalidad de la empresa, le reconoció una pensión de jubilación convencional, anticipada y transitoria, a partir del 09 de junio de 1997, cuyo carácter vitalicio dependía de que existiera alguna diferencia con la pensión legal de vejez, en virtud de la compatibilidad de la pensión convencional de jubilación con aquella prestación.

Aseveró que el último salario devengado por la actora ascendía a la suma de \$378.121, y la primera mesada pensional fue reconocida por valor de \$357.079 mensuales, que corresponde al 94,44% del salario, sin que hubiere lugar a indexar dicho valor hasta la fecha en que cumplió los 50 años de edad, por cuanto, la pensión transitoria de jubilación convencional se reconoció a partir del día siguiente al de la terminación de la relación de trabajo; que la pensión de jubilación se liquida sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, sin tener en cuenta las bonificaciones, pero las mismas si fueron consideradas para liquidar la primera mesada pensional; y que adicionalmente, continuó cancelado los aportes para el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte en favor de la demandante.

Agregó que, la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987 prevé que lo establecido respecto de la pensión de jubilación, se aplicaría en consonancia con el Decreto 3041 de 1966, por el cual el ISS asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, es decir, que en la misma ya se había pactado la compatibilidad por subrogación pensional; que la actora causó el derecho a la pensión de jubilación, y la misma fue reconocida, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, que establece como regla general la compatibilidad de las pensiones de jubilación y vejez; y que en el acuerdo de conciliación se pactó que la pensión de jubilación se compartiría con la pensión de vejez.

Finalmente, y en oposición a las pretensiones, propuso las excepciones de fondo que denominó cosa juzgada; inexistencia de la obligación; prescripción; compensación; y la excepción genérica e innominada (doc.16, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 20 de noviembre de 2023, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación; absolvió al banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. de las pretensiones incoadas por la señora Blanca Elva Arango; y condenó en costas al demandante, en favor de la entidad demandada (doc.23, carp.01).

1.4. - ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, ninguna de las partes emitió pronunciamiento.

2. - CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Procede la consulta de la sentencia en favor de la señora **Blanca Elva Arango**, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que dispone: *“Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas”*.

2.2.- HECHOS NO CONTROVERTIDOS

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Blanca Elva Arango nació el 22 de septiembre de 1948 (pág.01, doc.07, carp.01); y suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con el Banco Comercial Antioqueño S.A., para desempeñar el cargo de encargada del aseo, con una remuneración de \$650 mensuales (doc.10, subcarp.16, carp.01).
- Que el Banco Comercial Antioqueño S.A., cambió su denominación a la de Banco Santander Colombia S.A., mediante la Escritura Pública No.2157 del 23 de junio de

1997 de Notaría 29 de Medellín; a la de Banco Corpbanca Colombia S.A. a través de la Escritura Pública No.2008 del 09 de agosto de 2012 de Notaría 23 de Bogotá; y a la de Itaú Corpbanca Colombia S.A., mediante la Escritura Pública No.1208 del 16 de mayo de 2017 de Notaría 25 de Bogotá (págs.42-129, doc.16, carp.01).

- Que la señora Blanca Elva Arango y el Banco Comercial Antioqueño S.A., celebraron un contrato de transacción el 03 de junio de 1997 (págs.05-06, doc.07, carp.01; doc.12, subcarp.16, carp.01) y un acuerdo de conciliación el 12 de junio de 1997 (págs.07-10, doc.07, carp.01; doc.11, subcarp.16, carp.01), en los que convinieron dar por terminada la relación de trabajo a partir del 08 de junio de 1997, y convinieron el reconocimiento de una pensión jubilación, a partir del 09 de junio de 1997, liquidada sobre el 75% del promedio salarial devengado en el último año de servicio (*parafraseo*).

- Que el último salario devengado por la actora ascendía a la suma \$378.121 (doc.14, subcarp.16, carp.01), pero la primera mesada fue liquidada con el promedio del sueldo devengado durante el último año de servicios, incluyendo, los salarios, subsidios de transporte, bonificaciones extralegales, horas extras y compensatorios, por valor de \$476.105; ingreso base de liquidación al que le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, para una mesada de \$357.079, que equivale al 94% del último salario devengado (pág.22, doc.07, carp.01; doc.15, subcarp.16, doc.01).

- Que la pretensora fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 1623 del 25 de enero de 2005, a partir del 22 de septiembre de 2003, con una mesada inicial de \$691.596, liquidada sobre 1.281 semanas cotizadas, un IBL de \$768.440 y una tasa de reemplazo del 90%, de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición (doc.29, subcarp.16, carp.01).

- Que Itaú Corpbanca Colombia S.A. canceló en favor de la demandante las mesadas causadas entre el 09 de junio de 1997 y el 31 de junio de 2005 (págs.11-20, doc.07, carp.01; docs.19-28, subcarp.16, carp.01), y recibió el reembolso de las mesadas

reconocidas desde el 22 de septiembre de 2003, mediante el pago del retroactivo reconocido por el Instituto de Seguros Sociales (doc.29, subcarp.16, carp.01).

- Que la actora reclamó el reconocimiento y pago de las pretensiones objeto de la presente acción ordinaria, mediante derecho de petición radicado el 12 de marzo de 2020 (pág.24, doc.07, carp.01).

2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Deberá la Sala determinar:

- ¿Si a la señora Blanca Elva Arango le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión mensual de jubilación prevista en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987; y si la referida prestación es vitalicia, compatible y excluyente con la pensión voluntaria y/o legal que actualmente percibe?

De manera subsidiaria habrá que establecer;

- ¿Si a la señora Blanca Elva Arango le asiste el derecho al reajuste de la pensión de jubilación convencional, con base el 100% del salario devengado en el último año, debidamente indexado?

- ¿Si el acuerdo de conciliación celebrado entre la señora Blanca Elva Arango y el Banco Comercial Antioqueño S.A. adolece de ineficacia y/o nulidad?

2.4.- TESIS DE LA SALA

El problema jurídico propuesto se resolverá bajo la tesis según la cual (i) la pensión de jubilación reconocida en favor de la actora tiene el carácter de convencional, bajo el entendimiento de que las partes anticiparon su reconocimiento mediante un acuerdo de conciliación; (ii) se rige por normas previstas en la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, siendo que fue la última que reguló lo referido a las pensiones de jubilación,

y era la que se encontraba vigente para la fecha de terminación del contrato; (iii) es compatible con la pensión de vejez legal, por haberse causado con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2879 de 1985, sin que se hubiere establecido expresamente su compatibilidad (iv) que no hay lugar al reajuste de la primera mesada pensional, por haberse reconocido sobre una base salarial superior a la acordada, a partir del día siguiente al de la terminación del contrato; y (v) que el acuerdo de conciliación celebrado entre las partes es plenamente válido, por no haberse probado causal de nulidad y/o ineficacia. Consecuentemente, la sentencia absolutoria de primera instancia será **confirmada**.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

2.5.1.- De la naturaleza jurídica de la pensión extralegal

En primer lugar, destaca la Sala que en el acta de conciliación suscrita el 12 de junio de 1997, por la señora Blanca Elva Arango y el Banco Santander Colombia S.A., hoy Itaú Corpbanca Colombia S.A., expresamente acordaron:

“La trabajadora es consciente, y así lo hace constar, de que los riesgos de vejez están en su caso, directa, única y exclusivamente a cargo del Instituto de Seguros Sociales, o una entidad de seguridad social, sometida a los requisitos de cotizaciones y edad señalados por las normas legales; sin embargo el Banco le empezará a pagar, a partir del día 9 de junio de 1997, una pensión de jubilación convencional liquidada sobre el 75% del promedio salarial devengado en el último año, y se le pagará hasta que el Instituto de Seguros Sociales, o una entidad de seguridad social, le reconozca la pensión de vejez.

Una vez ocurrido esto, el Banco le empezará a cubrir el valor de la diferencia que pudiere existir entre la pensión que reconozca el Instituto de Seguros Sociales, o una entidad de seguridad social, y la que le esté pagando el Banco en ese momento. En caso de que la trabajadora Blanca Elva Arango no se presente a reclamar su pensión una vez cumpla los requisitos para tal fin, el Banco podrá hacerle compartida la pensión en forma automática, pagando desde entonces, solo la diferencia que presuma le corresponde al jubilado, entre la pensión que estuviere pagando en esa época, y la que presuma le reconocería el ISS o un fondo privado” (págs.07-10, doc.07, carp.01; doc.11, subcarp.16, carp.01).

De la lectura de lo acordado, refulge claro para la Sala que la voluntad de las partes fue anticipar el reconocimiento de la pensión jubilación convencional, independiente de que en el acta de conciliación se hubiera hecho alusión o no al cuerpo normativo que consagraba el derecho prestacional, esto es, a la Convención Colectiva de Trabajo que regía para la época; ello así por cuanto en el acta de conciliación se dejó expresamente sentado que la prestación que se concedería sería la convencional de jubilación, solo que fue reconocida de forma anticipada, y que la misma sería transitoria, por lo que no otro entendimiento puede imprimirse a la cláusula referenciada, debiéndose colegirse, tal y como lo señaló el *a quo*, que la pensión de jubilación transitoria reconocida en favor de la señora Blanca Elva Arango, tiene carácter convencional.

2.5.2.- De la normativa que rige la pensión convencional

Ahora bien, en el plenario se encuentra acreditado que el Banco Comercial Antioqueño S.A. suscribió con la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios – ACEB, las siguientes Convenciones Colectivas de Trabajo:

✓ **1983-1985**, vigente entre el 01 de septiembre de 1983 y el 31 de agosto de 1985, que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54º. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...*” (págs.01-76, doc.09, carp.01; doc.01, subcarp.16, carp.01 – ver página 35).

✓ **1985-1987**, vigente entre el 01 de septiembre de 1985 y el 31 de agosto de 1987, que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación (págs.77-116, doc.09, carp.01; doc.02, subcarp.16, carp.01).

✓ **1987-1989**, vigente entre el 01 de septiembre de 1987 y el 31 de agosto de 1989, que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54º. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos*”

a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...” (págs.117-148, doc.09, carp.01; doc.03, subcarp.16, carp.01 – ver página 17).

✓ **1989-1991**, vigente entre el 01 de septiembre de 1989 y el 31 de agosto de 1991, que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...*” (págs.149-180, doc.09, carp.01; doc.04, subcarp.16, carp.01 – ver página 17).

✓ **1991-1993**, vigente entre el 01 de septiembre de 1991 y el 31 de agosto de 1993, que en lo que respecta a la causación de la pensión de jubilación establece: “*ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación ...*” (págs.181-218, doc.09, carp.01; doc.05, subcarp.16, carp.01 – ver página 19).

✓ **1993-1995**, vigente entre el 01 de septiembre de 1993 y el 31 de agosto de 1995, que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación (págs.219-233, doc.09, carp.01; doc.06, subcarp.16, carp.01).

✓ **1995-1997**, vigente entre el 01 de septiembre de 1995 y el 31 de agosto de 1997, que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación (págs.234-251, doc.09, carp.01; doc.07, subcarp.16, carp.01).

✓ **1997-1999**, vigente entre el 01 de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999, que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación (págs.252-271, doc.09, carp.01; doc.08, subcarp.16, carp.01).

✓ **1999-2001**, vigente entre el 01 de septiembre de 1999 y el 31 de agosto de 2001, que no derogó, sustituyó ni modificó lo que convenido anteriormente con relación a la pensión de jubilación (doc.09, subcarp.16, carp.01).

Para determinar entonces cuál es la Convención Colectiva de Trabajo que rige o gobierna la pensión de jubilación convencional reconocida en beneficio de la actora, cumple memorar que la señora Blanca Elva Arango laboró al servicio del Banco Comercial Antioqueño S.A, desde el 11 de octubre de 1967 y hasta el 08 de junio de 1997, y que acreditó los 20 años de servicio exigidos en las Convenciones Colectivas de Trabajo antes descritas para causar el derecho a la pensión de jubilación convencional, en la fecha 11 de octubre de 1987, misma para la cual se encontraba vigente la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1989.

Ahora bien, el artículo 71 de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 establece:

“ARTÍCULO 71º. PENSIONES DE JUBILACION. Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente (compilación 1.985-1.987), artículos 54o. a 70o. inclusive, se aplicará solamente a quienes al 31 de agosto de 1.985 tengan celebrado contrato de trabajo por escrito y vigente en esa fecha con el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. A quienes ingresen con vínculo laboral a partir del 1 de septiembre de 1.985 no se les aplicará el régimen de pensiones ya mencionado y se someterá en materia de pensiones a las leyes y demás disposiciones oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar de su derecho”. (págs.181-218, doc.09, carp.01; doc.05, subcarp.16, carp.01 – ver página 22).

Sin embargo, para la Sala es claro que la referida cláusula convencional lo que hace es restringir el acceso a los beneficios pensionales pactados en la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993, y a su vez que compila los consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, para los trabajadores vinculados a la compañía mediante contrato de trabajo escrito y vigente al 31 de agosto de 1985, esto es, la cláusula convencional no refiere que a los trabajadores inmersos en la condición allí descrita (contrato vigente al 31 de agosto de 1985), le sea aplicable la Convención Colectiva de Trabajo 1985-1987, sino que dice que los beneficios allí consagrados, pero compilados en la nueva convención, solo favorecen a los trabajadores que acrediten la referida condición.

Corolario de lo anterior, se colige que la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1989 es la que rige y/o gobierna la pensión de jubilación convencional reconocida en favor de la señora Blanca Elva Arango, vigente para la fecha en que se causó el derecho al reconocimiento de la prestación.

2.5.3.- De la compartibilidad de la pensión convencional

El artículo 76 de la Ley 90 de 1946 establece:

“ARTICULO 76. El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales”.

Y el artículo 60 del Decreto 3041 de 1967 indica:

“ARTICULO 60. Los trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 15 años o más de servicios continuos o discontinuos en una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos (\$800.000) moneda corriente o superior, ingresarán al Seguro Social obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el tiempo de servicios y la edad exigidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y este estará obligado a pagar dicha jubilación, pero continuarán cotizando en este seguro hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono.

A su vez el artículo 5° del Decreto 2879 de 1985, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 224 del mismo año, preceptúa:

“ARTÍCULO 5o. Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.

La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.

Finalmente, el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, a través del cual se aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, prevé:

“ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.

En complemento de lo anterior, la cláusula 58 de la Convención Colectiva de Trabajo 1991-1993 regula:

“ARTÍCULO 58°. La pensión aquí fijada excluye y reemplaza que se sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacerse efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. Si optare por la que se fija en la presente codificación, se entiende que el pago de ella incluye la fijada por la ley y por consiguiente el Banco al reconocerla cumple con las disposiciones legales al respecto”. (ver páginas 199-200, doc.01, carp.01).

Sobre el particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suma de Justicia, en la Sentencia SL376-2023, reiteró:

“De entrada, debe señalarse que la razón no está de parte de la recurrente, puesto que ya la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el punto objeto de controversia frente a la misma accionada, como por ejemplo en la sentencia CSJ SL4545-2019, reiterada en la CSJ SL3175-2021, en donde se sostuvo que, aun cuando la regla general, es que las prestaciones pensionales extralegales, otorgadas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, comportan el carácter de compartibles, con ocasión de lo previsto por el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de igual anualidad, y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, dicha circunstancia no obsta para que las partes, pacten su compatibilidad, pues no existe restricción alguna frente a un acuerdo de voluntades de tal connotación.

Precisamente, la Corte en sentencia CSJ SL2238-2021, al rememorar otras en ese mismo sentido, entre otras, la CSJ SL4545-2019, sostuvo:

«No sobra precisar que si bien los artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen la compatibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador con la vejez por cuenta del ISS, la norma inicialmente mencionada, establece que el primero deberá cotizar al ISS hasta tanto el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando por su cuenta únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el instituto y la de jubilación que venía percibiendo, y que, además, para la financiación de la prestación que llegase a conceder el ISS, el empleador debe trasladar el valor correspondiente al bono pensional, ello, per se, no impedía que las partes en forma voluntaria, como en este caso a través de la convención colectiva de trabajo, dispusieran que la pensión a cargo del empleador fuera compatible con la de vejez».

En el mismo sentido, en la sentencia CSJ SL4080-2018, adoctrinó:

Desde el punto de vista jurídico, propio de ambos cargos, el Tribunal no incurrió en error alguno al sostener que las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, son, en principio, compartidas con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, salvo que se exprese en ellas mismas que son compatibles. Tal orientación es la que se deriva expresamente de lo plasmado en el artículo 5 de la referida normativa y es la que ha mantenido de manera invariable esta Corporación a través de su jurisprudencia (Ver las sentencias CSJ SL13190-2015 y CSJ SL498-2016, entre muchas otras).

De igual forma, en sentencia CSJ SL118-2019, sobre el tema de compatibilidad y compatibilidad pensional, esta Corporación señaló:

Frente a este último punto, esta sala de la Corte ha señalado, con insistencia, que, por regla general, las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con las de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, pues la

posibilidad de compartirlas sólo se generó tras la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985. Del mismo modo, ha adoctrinado que las excepciones a dicha regla sólo pueden provenir de un acuerdo entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.

En este orden de ideas, cumple relieves que en el artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1989 (págs.117-148, doc.09, carp.01; doc.03, subcarp.16, carp.01 – ver página 17), ni en ninguno de los artículos del capítulo décimo, referido a las pensiones convencionales, se pactó, acordó o convino de forma expresa la compatibilidad de la pensión de jubilación convencional, con la pensión de vejez legal, y aunque es cierto que el artículo 62 del mismo compendio normativo establece que la pensión convencional por incapacidad total es incompatible con cualquier otra pensión que fije a ley, no resulta admisible entender, bajo una sistemática, integral y armónica interpretación del texto convencional, que la voluntad de las partes fue restringir la compatibilidad de las pensiones convencionales con la pensión legal, única y exclusivamente respecto de esta prestación, siendo que, en el artículo 58, se itera, expresamente se pactó *“La pensión aquí fijada excluye y reemplaza que se sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacerse efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección”*.

Finalmente, importa memorar que aunque la Corte Constitucional estableció que de los principios de articulación, organización y unificación que irradian la Ley 100 de 1993, se desprende la derogatoria orgánica de todas las normas que integraban el régimen de seguridad social anterior (Sentencia SU-140 de 2019), la Sala considera que con la expedición de la Ley 100 de 1993 no se derogaron los Decretos 758 de 1990 y 2879 de 1985, en lo que respecta a la compatibilidad de la pensión de jubilación, siendo que la finalidad del Sistema General de Pensiones es garantizar el cubrimiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte que venían siendo cubiertos por los patronos, ya fuere por disposición legal, contractual, convencional o reglamentaria.

En esta línea el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 al definir el Régimen de Prima Media con Prestación Definida señala *“... serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para*

los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones modificaciones y excepciones contenidas en esta Ley”.

En vista de lo anterior, se colige que la pensión de jubilación convencional reconocida en favor de la señora Blanca Elva Arango, no es compatible sino **compatible** con la pensión de vejez legal, correspondiéndole a Itaú Corpbanca Colombia S.A. únicamente pagar el mayor valor que se hubiere causado entre la pensión convencional y la legal, estando acreditado que Colpensiones E.I.C.E. asumió el pago íntegro de la prestación desde el 22 de septiembre de 2003, por cuanto la pensión legal fue liquidada en cuantía superior a la pensión de jubilación convencional (doc.29, subcarp.16, carp.01).

2.5.4.- De la liquidación de la mesada pensional

De otro lado, la Sala advierte que de forma subsidiaria la señora Blanca Elva Arango solicitó el reajuste de la pensión de jubilación convencional, con base en el 100% del salario promedio devengado en el último año anterior al retiro, indexado desde el 08 de junio de 1997, cuando finalizó el contrato de trabajo, y hasta el 22 de septiembre de 1998, cuando cumplió los 50 años de edad.

En virtud de ello, se remite la Sala a la cláusula 54 de la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1989 que establecía:

“ARTÍCULO 54°. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del Banco, sin tener en cuenta bonificaciones...” (págs.117-148, doc.09, carp.01; doc.03, subcarp.16, carp.01 – ver página 17).

Sin embargo, lo cierto que para liquidar el monto de la prestación el Banco Comercial Antioqueño S.A. promedió no solo los salarios devengados por la actora en el último año, sino, además, las sumas reconocidas por auxilio de transporte, las cuales no constituyen factor salarial, y las bonificaciones extralegales que, conforme a lo pactado en la cláusula convencional antes descrita, no debían ser consideradas para tal efecto, y

fue por ello que obtuvo como salario promedio mensual devengado, la suma de \$476.105, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 75%, arrojó una mesada de \$357.079 (pág.431, doc.02, carp.01; pág.456, doc.05, carp.01).

Adicionalmente, se colige que no hay lugar a la indexación del salario base para liquidar el monto de la pensión de jubilación convencional, toda vez que la prestación fue reconocida a partir del día siguiente al de la terminación del contrato, esto es, la cifra que se tuvo como base para liquidar el monto de la prestación no sufrió los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y por ello, sobre la misma, no procede la corrección monetaria.

En todo caso, la pensión de jubilación fue reconocida en favor de la actora a partir del 09 de junio de 1997, aunque la misma solo arribaría a los 55 años de edad el 22 de septiembre de 1998, esto es, con un (1) año de anticipación, beneficio del que se hizo acreedora por el acuerdo de conciliación celebrado con su antiguo empleador, y en virtud de la cual resultaba admisible modificar los parámetros o criterios de liquidación, en razón a que la prestación no se había causado en favor de la actora, esto es, la demandante no tenía un derecho consolidado o adquirido.

2.5.4.- De la validez y eficacia del acuerdo de conciliación

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que validez y eficacia del acuerdo de conciliación del 12 de junio de 1997 es objeto de discusión, se destaca que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado:

‘Pues bien, lo primero que hay que decir, es que respecto de la conciliación en materia laboral, la Corte ha enseñado, que en el mismo sentido que ocurre en otras ramas del derecho, es un mecanismo de autocomposición, que con la ayuda de un tercero componedor, busca resolver las diferencias surgidas entre trabajador y empleador en el transcurso del contrato de trabajo, efectuándose concesiones mutuas y, que por ser un acto o declaración de voluntad, para su validez y eficacia queda sujeta a que se cumplan los requisitos que de manera general exige el artículo 1502 del Código Civil. Así, para que operen los efectos de cosa juzgada, se requiere que la conciliación sea aprobada por autoridad competente, que no existan vicios en el consentimiento ni

se violen normas de orden público y que se respeten los derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de conciliación” (CSJ SL1639-2022).

Así las cosas, para este juez plural resulta ajustada la determinación del cognoscente de primera instancia al concluir que el acuerdo celebrado entre las partes goza de plena validez, en tanto que no transgrede derechos mínimos e irrenunciables de la demandante, contrario a ello, la gestora de la presente acción ordinaria se benefició con dicho acuerdo, al entrar a disfrutar de la pensión de jubilación de manera anticipada, y con dicho acuerdo tampoco se desconoció el carácter vitalicio de la pensión de jubilación, en tanto se acordó que el banco continuaría pagando la diferencia que existiere, entre la pensión de jubilación y la que posteriormente otorgue el ISS, siendo lo acreditado, que el valor de la medada pensional reconocida por el extinto Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 1623 del 25 de enero de 2005 (doc.29, subcarp.16, carp.01), fue superior a la que venía percibiendo la demandante.

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia absolutoria de primera instancia. Sin costas en esta instancia por haberse revisado el fallo de primera instancia bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora Blanca Elva Arango.

3.- DECISIÓN

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:


1.- Se CONFIRMA la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2023 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Blanca Elva Arango contra Itaú Corpbanca Colombia S.A.

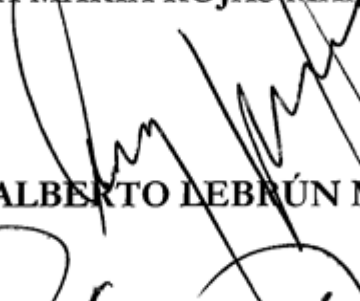
2.- Sin costas en esta instancia.

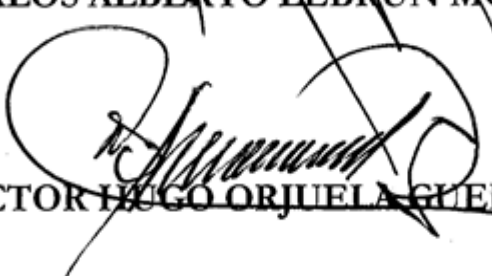
3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones, cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO